

§ 5. LAS POTESTADES NORMATIVAS DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS DEL ESTADO.

1. Introducción.

- 1 Además de las potestades constituyente, legislativa y normativa administrativa, el sistema jurídico chileno confiere potestades normativas a órganos del Estado que por disposición de la Constitución no se encuentran subordinados al Presidente de la República.
- 2 En la medida en que es la Constitución -y no la ley- la que confiere estas potestades normativas y les reconoce un ámbito propio de competencia, no puede sostenerse que se trate de meras potestades normativas administrativas descentralizadas. En otras palabras, no puede afirmarse sin más que se trata de normas reglamentarias de rango jerárquico inferior a las normas reglamentarias establecidas por el Presidente de la República¹.
- 3 Algunas de las disposiciones constitucionales sobre estas potestades, como las relativas a los Tribunales Superiores de Justicia, provienen sin mayor alteración de la tradición constitucional chilena. En otros casos, la Constitución de 1980 ha clarificado el carácter autónomo del órgano estatal en cuestión, que antes fuera dudoso, cual es el caso de las municipalidades y del Banco Central. De este modo, el sistema jurídico chileno presenta desde 1980 una tendencia más acentuada que la de su historia anterior a la descentralización constitucional de las potestades normativas y al reconocimiento constitucional de ámbitos especiales de competencia. Esta tendencia no ha recibido, sin embargo, una consagración clara y definida en las disposiciones constitucionales respectivas. Los problemas de interpretación que ello suscita deben sujetarse, sin embargo, al menos a cuatro principios básicos.
- 4 El esclarecimiento de la distribución de ámbitos de competencia efectuada por la Constitución exige precisar, en cada caso, si se trata de una potestad normativa de ejercicio concurrente o si se trata de una potestad normativa exclusiva. Una potestad normativa es *de ejercicio concurrente* cuando comparte su ámbito material de competencia con una o más potestades normativas. Una potestad normativa es *exclusiva*, cuando su ámbito material le está reservado a su ejercicio, con exclusión de otra(s) potestad(es) normativa(s). La importancia de esta diferencia es obvia, tratándose de ámbitos autónomos

¹ Por esta razón no puede sostenerse como principio general que las potestades normativas de todos los entes públicos autónomos se encuentren subordinadas a las normas constitucionales, legales y reglamentarias (así, Jorge Streeter Prieto, “Potestad Normativa de Entes Públicos Autónomos”, Materiales de Clase para Derecho Económico III, Facultad de Derecho, Universidad de Chile, Diciembre de 1986, p. 5). Esta tesis es correcta tratándose de los órganos del Estado creados por ley, tal como se sostuvo respecto de las potestades normativas de los órganos de la administración descentralizada (*supra*, § 4, núms. 54-57). No lo es, como principio general, tratándose de los órganos del Estado dotados constitucionalmente de autonomía frente al Presidente de la República.

- 5 La autonomía consagrada por la Constitución se refiere a la posición de estos órganos dentro de la administración del Estado (*supra*, § 4, núm. 1) en relación con la supremacía jerárquica del Presidente de la República (Art. 24 C.Pol.). Luego, es posible afirmar como principio general que el ámbito de competencia de estas potestades es exclusivo respecto de la potestad reglamentaria. Las consecuencias prácticas de este principio son:
- (a) la inconstitucionalidad del decreto supremo que regule materias propias del ámbito de competencia de una potestad normativa autónoma;
 - (b) en caso de imposibilidad procedimental de hacer valer dicha inconstitucionalidad, la supremacía jerárquica de la regulación establecida en ejercicio de la potestad normativa autónoma.
- 6 El principio anterior admite excepciones. La interpretación de la potestad normativa autónoma como de ejercicio concurrente con la potestad reglamentaria es plausible. La regulación de la ley orgánica constitucional respectiva puede invocarse en este sentido como argumento interpretativo de la regulación constitucional.
- 7 La autonomía consagrada por la Constitución no se refiere a la posición de estos órganos en relación con el ejercicio de la soberanía por parte del Congreso Nacional y el Presidente de la República en el ejercicio de la potestad legislativa. La cuestión de si el ámbito de competencia de la potestad normativa autónoma es exclusivo respecto de la potestad legislativa o de ejercicio concurrente con ella debe determinarse atendiendo al Art. 63 C.Pol. (materias de ley). En caso de concurrencia, tienen supremacía jerárquica las normas legales.
- 8 No puede excluirse *a priori*, sin embargo, que la Constitución de 1980 haya configurado un ámbito de competencia exclusivo para un órgano de la administración del Estado constitucionalmente autónomo, incluso respecto de la potestad legislativa. La carga argumentativa corresponde sin embargo a la interpretación que la conciba como potestad exclusiva: *in dubio pro lege*.
- 9 En lo que sigue nos ocuparemos de los principales casos de potestades normativas de órganos autónomos de la administración del Estado.

2. La potestad normativa del Banco Central.

- 10 El Banco Central de Chile es un organismo autónomo, de rango constitucional y carácter técnico, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y de composición indefinida (Art. 1° LOC 18.840), que tiene por objeto velar por la estabilidad de la moneda y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos (Art. 3° LOC 18.840).
- 11 El marco regulatorio de los actos del Banco Central se encuentra en los Arts. 108 y 109 C.Pol. y en la LOC 18.840.

- 12 El órgano competente para ejercer la potestad normativa y todas las demás atribuciones conferidas al Banco Central es su Consejo, constituido por cinco consejeros designados por el Presidente de la República con acuerdo del Senado (Arts. 6° y 7° LOC 18.840).
- 13 El Consejo sesiona válidamente con la asistencia de al menos tres de sus miembros y adopta válidamente sus acuerdos por mayoría de los presentes, salvo que la ley exija un quórum mayor (Art. 11 LOC 18.840).
- 14 El ámbito de competencia de la potestad normativa del Banco Central se relaciona principalmente con su función de organismo regulador del sistema financiero y del mercado de capitales (Arts. 34, 35 LOC 18.840), así como de las operaciones de cambio internacional (Arts. 40, 42, 43, 49 LOC 18.840)².
- 15 El término utilizado para designar el acto normativo válido del Consejo es el de “acuerdo”, del cual se deja constancia en el acta de la sesión respectiva (Art. 11 inciso final LOC 18.840).
- 16 Los principales acuerdos adoptados en ejercicio de sus potestades normativas son incorporados por el Banco Central en un texto refundido, coordinado y sistematizado denominado “Compendio”. El Tomo I de este texto corresponde al Compendio de Normas de Cambios Internacionales, y el Tomo II, al Compendio de Normas Financieras. Los acuerdos que establecen normas del Compendio, así como todos los acuerdos de carácter general, deben ser publicados en el Diario Oficial (Art. 67 LOC 18.840).
- 17 El carácter concurrente o exclusivo del ámbito material de competencia del Banco Central, así como el rango jerárquico de sus acuerdos son cuestiones inciertas. En todo caso, puede señalarse que:
- 18 (a) Los acuerdos del Banco Central se encuentran subordinados tanto a las normas y principios constitucionales como a las normas de su propio marco regulatorio (*supra*, núm. 11). Especialmente importante a este respecto es la prohibición de discriminación establecida en el inciso final del Art. 98 C.Pol.
- 19 (b) En ciertas materias -especialmente en lo que se refiere a la regulación del sistema financiero y del mercado de capitales- es evidente el carácter concurrente de la potestad normativa del Banco Central con la potestad legislativa. En todo este ámbito de concurrencia, el acuerdo del Banco Central ostenta un rango jerárquico inferior al de la ley. Lo anterior se encuentra confirmado por la concesión que hace el propio marco regulatorio legal del Banco Central de un recurso de reclamación en contra de acuerdos ilegales (Arts. 69 y 70 LOC 18.840).
- 20 (c) La organización interna del Banco Central es materia de competencia exclusiva de su propia potestad normativa, sin perjuicio de lo que al respecto dispongan la Constitución o la respectiva ley orgánica (Arts. 108 C.Pol., Art. 2° LOC 18.840).

² Conforme al Art. 58 LOC 18.840 el Banco Central tiene también potestad para imponer multas en caso de infracciones a la regulación de las operaciones de cambio internacional por él establecida.

- 21 (d) Las relaciones de la potestad normativa del Banco Central con la potestad reglamentaria del Presidente de la República no son fáciles de determinar. Sin embargo, del Art. 19 LOC 18.840 pareciera desprenderse que la ley orgánica ha considerado al ámbito de competencia de la potestad normativa del Banco Central como ámbito exclusivo respecto de las potestades normativas de todos los demás órganos de la Administración Pública³. Esto, claro está, no resuelve la cuestión de modo definitivo, sino que la remite a otro nivel. Pues, para que esta regulación de la LOC 18.840 sea válida, es necesario afirmar que dentro del concepto de “organismo autónomo” del Art. 108 C.Pol. se encuentra comprendida la exclusividad de competencia normativa frente a la potestad reglamentaria del Presidente de la República, y que la remisión normativa a la LOC respectiva que efectúa ese precepto incluye la facultad de determinar el ámbito de dicha competencia normativa exclusiva⁴.

3. La potestad normativa del Consejo Nacional de Televisión.

- 22 El Consejo Nacional de Televisión es un órgano público autónomo, funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propio, encargado de velar por el correcto funcionamiento de la televisión (Art. 1º L. 18.838).
- 23 El marco de regulación del Consejo Nacional de Televisión se encuentra en el Art. 19 N° 12 inciso sexto y final de la C.Pol. y la L. 18.838, que es de quórum calificado, y que experimentó importantes modificaciones en 1992, en virtud de la L. 19.131.
- 24 El Consejo está formado por once miembros, uno de los cuales -su Presidente- es de libre designación por el Presidente de la República, y los diez restantes son designados por él con acuerdo del Senado (Art. 2º L. 18.838).
- 25 La atribución constitucionalmente conferida al Consejo Nacional de Televisión consiste en “velar por el correcto funcionamiento de la televisión” (Art. 19 N° 12 inciso final C.Pol.). La Ley 18.838 concreta en cierto modo el concepto de “correcto funcionamiento” de la televisión⁵, y especifica las atribuciones comprendidas en el concepto de “velar”, dentro de las cuales se encuentra el ejercicio de una potestad normativa para regular dos materias:

³ Esta disposición faculta al Ministro de Hacienda para asistir a las sesiones del Consejo, con derecho a voz, y en caso de desacuerdo del Gobierno con lo acordado por el Consejo, le confiere la facultad de suspender la aplicación del acuerdo por un plazo no superior a 15 días. Ello, salvo que el Consejo por unanimidad de sus miembros en ejercicio insista en la aplicación del acuerdo, caso en el cual no se suspende. Si la LOC hubiera considerado al acuerdo del Banco Central como jerárquicamente subordinado a las normas establecidas por el Presidente de la República, el procedimiento anterior carecería de sentido.

⁴ La Sentencia del Tribunal Constitucional de 20.09.89, sobre control de constitucionalidad de la LOC 18.840, ratifica en todo caso que la Constitución de 1980 excluye al Banco Central de la Administración del Estado subordinada al Presidente de la República, siendo por lo tanto una excepción a lo dispuesto en el Art. 24 C.Pol.

⁵ Art. 1º inciso tercero: “Se entenderá por correcto funcionamiento de esos servicios (de televisión) el permanente respeto, a través de su programación, a los valores morales y culturales propios de la Nación; a la dignidad de las personas; a la paz; a la protección del medio ambiente, y a la formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud dentro de dicho marco valórico” (redacción de la Ley 19.131).

- (a) la transmisión y recepción de la televisión por satélite (Art. 12 literal f L. 18.838);
- (b) la prohibición, mediante la dictación de normas generales, de la transmisión de programas que contengan violencia excesiva, truculencia, pornografía o participación de niños o adolescentes en actos reñidos con la moral o las buenas costumbres (Art. 12 literal l inciso segundo L. 18.838).
- 26 El Consejo sesiona en forma ordinaria o extraordinaria, requiriendo para la validez de sus sesiones la concurrencia de la mayoría de sus miembros en ejercicio y para la adopción válida de sus acuerdos el voto de la mayoría de los miembros presentes en la sesión, salvo la exigencia por la ley de un quórum más estricto (Art. 5° L. 18.838). Las normas que dicta el Consejo deben ser publicadas en el Diario Oficial (Art. 12 literal l inciso cuarto L. 18.838).
- 27 El ámbito de competencia de la potestad normativa del Consejo es de carácter concurrente con el ámbito de competencia de la potestad legislativa en un importante grado, ya que se refiere a materias también reguladas por la Ley sobre libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo (“Ley de prensa”, Ley 19.733), la Ley General de Telecomunicaciones (Ley 18.168) y el Código Penal. En todo el ámbito concurrente de competencia, las normas establecidas por el Consejo Nacional de Televisión se subordinan a las normas legales.
- 28 Más difícil es determinar las relaciones existentes entre la potestad normativa del Consejo y la potestad reglamentaria del Presidente de la República. Si bien la reforma introducida por la Ley 19.131 pareciera concebir al Consejo Nacional de Televisión como una institución fiscalizadora funcionalmente descentralizada, pero subordinada jerárquicamente al Presidente de la República -algo así como una “Superintendencia de Televisión”-, lo cierto es que las atribuciones de este órgano no son conferidas por una norma legal, sino por una norma constitucional que expresamente lo declara autónomo. En este sentido, el tipo de competencia del Consejo Nacional de Televisión pareciera ser más bien asimilable al del Banco Central (*supra*, núms. 17 y ss) que al de las instituciones fiscalizadoras comunes.

4. La potestad normativa municipal.

- 29 Las municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico y cultural de la comuna (Art. 118 inciso tercero C.Pol., Art. 1 inciso segundo LOC 18.695).
- 30 El marco regulatorio de la actividad de la municipalidad se encuentra en los Arts. 118 a 126 C.Pol. y en la LOC 18.695. Las normas constitucionales originarias fueron modificadas por la LRC 19.097, de 1991 y por la LRC 19.526, de 1997. La 19.704 autorizó al Presidente de la República para dictar un decreto con fuerza de ley que fijara el texto refundido, coordinado,

sistematizado y actualizado de la ley orgánica constitucional respectiva. Dicho texto fue fijado por el DFL N° 1-19.074, de 27 de Diciembre de 2001.

- 31 Los órganos que intervienen en el ejercicio de la potestad normativa municipal –que “constituyen la municipalidad”- son el alcalde y el concejo (Art. 118 inciso primero C.Pol, Art. 2ª LOC 18.695). El alcalde es la máxima autoridad de la municipalidad, elegido y reelegible por sufragio universal por un período de cuatro años (Art. 118 inciso primero C.Pol., Arts. 2º y 56 s. LOC 18.695). El concejo es un órgano colegiado, compuesto por un número variable de miembros elegidos y reelegibles por sufragio universal por un período de cuatro años, de carácter normativo, resolutivo y fiscalizador (Art. 119 C.Pol., Arts. 71 s. LOC 18.695).
- 32 La Constitución designa el ámbito de competencia de la potestad normativa municipal con la mención genérica de “administración local de (la) comuna” (Art. 118 inciso primero C.Pol.). La LOC 18.695 regula más detalladamente este ámbito, distinguiendo entre funciones municipales privativas y funciones municipales concurrentes (Arts. 3º y 4º LOC 18.695).
- 33 En tanto ámbitos materiales de competencia de la potestad normativa municipal, las funciones más importantes son las siguientes funciones privativas:
- (a) confección del plan regulador comunal (Art. 3ª-b)
 - (b) aplicación de las disposiciones sobre transporte y tránsito públicos (Art. 3º-d);
 - (c) aplicación de disposiciones sobre construcción y urbanización; normas de tránsito (Art. 3ª-e).
- 34 A las materias anteriores se agrega la organización interna de la municipalidad, incluyendo especialmente la asignación específica de funciones a ciertas unidades y su coordinación (Art. 31 LOC 18.695), así como la regulación de las modalidades de participación de la ciudadanía local en el gobierno comunal (Art. 93 LOC 18.695), incluyendo la integración, organización, competencias y funcionamiento del consejo económico y social comunal, que es un órgano consultivo (Art. 94 LOC 18.695).
- 35 Para el cumplimiento de sus funciones, la ley otorga a las municipalidades como “atribución esencial” el dictar resoluciones obligatorias con carácter general o particular (Art. 5º-d LOC 18.695). Estas resoluciones son denominadas de diverso modo, según su objeto y alcance (Art. 12 LOC 18.695):
- (a) Las “ordenanzas” son normas generales y obligatorias aplicables a la comunidad, que pueden incluso establecer multas;
 - (b) Los “reglamentos municipales” son normas generales obligatorias y permanentes, relativas a materias de orden interno de la municipalidad;
 - (c) Los “decretos alcaldicios” son resoluciones que versan sobre casos particulares;
 - (d) Las “instrucciones” son directivas impartidas a los funcionarios subalternos.
- 36 En general, el alcalde tiene la potestad de dictar resoluciones obligatorias de carácter general (Art. 63-i L. 18.695). Para la dictación válida de determinadas normas, sin embargo, el alcalde

requiere acuerdo del concejo. Los casos más importantes son el plan regulador comunal, las ordenanzas municipales, el reglamento municipal de organización interna (Art. 65-b,-k LOC 18.695) y el reglamento de organización del consejo económico y social (Art. 94 inciso 2° LOC 18.695).

- 37 Por regla general, el concejo dispone de veinte días para pronunciarse acerca de las proposiciones del alcalde (Art. 82-c LOC 18.695). Transcurrido el plazo sin pronunciamiento del concejo, rige la proposición del alcalde (82 inciso final LOC 18.695).
- 38 El concejo se reúne en sesiones ordinarias (dos al mes) o extraordinarias (cuando sea convocado), sesiona válidamente con la mayoría de los concejales en ejercicio y adopta sus acuerdos válidamente por mayoría absoluta de los concejales asistentes en la sesión, salvo que excepcionalmente la ley requiera un quórum mayor (Arts. 84 y 86 LOC 18.695).
- 39 Las resoluciones municipales se encuentran exentas del trámite de toma de razón ante la Contraloría General de la República (Art. 52 LOC 18.695).
- 40 El hecho que la regulación de ciertas materias por ordenanzas municipales corresponda a una función privativa de la municipalidad según el Art. 3° LOC 18.695 no significa que dichas materias formen un ámbito de competencia exclusivo de la potestad normativa municipal. Las funciones privativas corresponden a materias reguladas por ley y por reglamentos. Esto es reconocido por la propia LOC 18.695, la cual expresamente condiciona la validez de las decisiones de la municipalidad a su conformidad con las normas legales y reglamentarias que regulen dichas materias (Art. 3° literales a, b, d y e LOC 18.695). En consecuencia, cabe concluir que en cuanto a las ordenanzas la potestad normativa municipal tiene un rango jerárquico análogo al de la potestad normativa administrativa descentralizada (*supra*, § 4, núms. 54 s.).
- 41 Por el contrario, la materia que sí parece ser de competencia exclusiva de la potestad normativa municipal es la organización interna de la municipalidad y de la participación ciudadana, incluyendo al consejo económico y social (*supra*, núm. 34). En este ámbito, la posición de la potestad normativa municipal es más bien análoga a la de la potestad normativa del Banco Central (*supra*, núm. 21).
- 42 Finalmente, en el contexto del establecimiento de reglas jurídicas en ejercicio de la potestad normativa municipal puede darse la posibilidad de la participación directa de la ciudadanía mediante un plebiscito comunal (Arts. 99 a 104 LOC 18.695). Los resultados del plebiscito en el cual haya participado más del 50% de los ciudadanos inscritos en los registros electorales de la comuna respectiva son vinculantes para la autoridad municipal (Art. 101 inciso tercero LOC 18.695).

5. La potestad reglamentaria interna de los órganos autónomos.

- 43 A la actuación de los órganos autónomos del Estado -incluidas las dos ramas del Congreso- es aplicable el Art. 7° C.Pol., conforme al cual la validez de las actuaciones de los órganos del Estado depende de su ejercicio en la “forma” que prescriba la ley.
- 44 La regla general es que la Constitución se remita a las normas legales para la regulación del procedimiento de actuación de los órganos del Estado. Las leyes respectivas se abstienen, sin embargo, de regular detalladamente el procedimiento de actuación de estos órganos, remitiéndose a su vez para tal efecto a reglamentos que han de ser dictados por los propios órganos. La potestad normativa correlativa a este mandato de reglamentación -la “potestad reglamentaria interna”- se transforma así en un modo de creación de reglas procedimentales de importancia en el sistema jurídico chileno.
- 45 Un ejemplo de lo anterior se encuentra en la potestad reglamentaria interna de la Cámara de Diputados y el Senado, la cual es presupuesta por la Constitución como una potestad normativa propia de cada una de las dos ramas del Congreso (Art. 56 inciso 2° C.Pol.). La LOC 18.918 establece además que las Cámaras del Congreso tienen “la facultad privativa” de dictar normas reglamentarias para regular su organización y funcionamiento interno (Art. 4°).
- 46 En general, puede afirmarse que tratándose de órganos públicos cuya autonomía frente al poder central de la Administración del Estado se encuentra constitucionalmente reconocida, es razonable entender que al menos en lo que respecta a la regulación de sus aspectos organizacionales y procedimentales internos dichos órganos gozan de un potestad reglamentaria excluyente de la potestad reglamentaria presidencial⁶.

6. Las facultades económicas o administrativas de los Tribunales Superiores de Justicia.

- 47 Usualmente, cuando se analiza la actividad de los tribunales de justicia como órganos creadores de normas jurídicas se examina la potestad jurisdiccional en función de su aptitud para generar normas jurídicas, ya sea mediante el efecto de cosa juzgada de las resoluciones judiciales o mediante su efecto como precedentes. Esto será analizado más adelante (*infra*, § 6). Aquí no se analiza la potestad jurisdiccional de los tribunales de justicia (conferida por reglas de adjudicación del sistema), sino aquella potestad normativa que el ordenamiento jurídico chileno confiere (mediante reglas de cambio) a los tribunales superiores de justicia para regular su

⁶ El caso más evidente de atribución por la Constitución de una potestad normativa reglamentaria interna a un órgano autónomo del Estado se encuentra en la regulación del Consejo de Seguridad Nacional (Art. 107 C.Pol.).

organización y funcionamiento interno. En cierto modo, se la puede considerar como un caso especial de potestad reglamentaria interna.

48 La Constitución reconoce y regula los aspectos básicos de tres órdenes jurisdiccionales:

- (a) La jurisdicción ordinaria, formada básicamente por la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones, los Tribunales de Juicio Oral en lo Penal, los Juzgados de Letras y los Juzgados de Garantía (Arts. 76 a 82 C.Pol.);
- (b) La jurisdicción especial constitucional del Tribunal Constitucional (Arts. 92 a 94 C.Pol.);
- (c) La jurisdicción especial electoral, formada por el Tribunal Calificador de Elecciones y los tribunales electorales regionales (Arts. 95 a 97 C.Pol.).

49 Respecto de estas tres clases de jurisdicción, la Constitución se remite a una ley orgánica constitucional para la regulación de “la organización y atribuciones de los tribunales”, tratándose de la jurisdicción ordinaria (Art. 77 C.Pol.), así como la regulación de la “organización y funcionamiento” del Tribunal Constitucional (Art. 92 inciso final C.Pol.) y el Tribunal Calificador de Elecciones (Art. 95 inciso final C.Pol.).

50 La ley orgánica constitucional relativa a la jurisdicción ordinaria es el Código Orgánico de Tribunales. Este cuerpo legal confiere a los tribunales de justicia, además de la potestad jurisdiccional, las así denominadas facultades conservadoras, disciplinarias y económicas (Art. 3° COT). De estas tres facultades, la que en esta oportunidad nos interesa es la facultad económica.

51 Por “facultad económica” -también denominada “facultad administrativa”- se entiende la atribución de adoptar medidas de carácter particular o establecer disposiciones de carácter general para regular la organización y funcionamiento del servicio judicial. El acto del tribunal por el cual se establece disposiciones de carácter general en ejercicio de la facultad económica, así como el texto autoritativo que fija lo establecido por dicho acto, reciben la denominación de “auto acordado”.

52 Las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema ejercen las facultades económica y administrativas en pleno (Arts. 66 inciso cuarto, 96 N° 4 COT)⁷.

53 Tratándose de las Cortes de Apelaciones, el COT no señala materias precisas de regulación por autos acordados, y restringe por otra parte el ámbito de validez de las normas que eventualmente sean establecidas en ejercicio de sus facultades económicas al ámbito territorial de competencia de cada Corte.

54 Tratándose en cambio de la Corte Suprema, la ley señala algunas materias como de regulación por autos acordados (distribución de ministros en salas, distribución de materias por cada sala: Arts. 95 inciso quinto, 99 inciso primero COT). Por otra parte, la Constitución la

⁷ Las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema son órganos colegiados, es decir, integrados por varios miembros, que se llaman Ministros. Por lo general, las Cortes ejercen sus atribuciones divididas en salas, entendiéndose que cada sala representa a la Corte respectiva. Excepcionalmente, las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema ejercen sus atribuciones con todos sus miembros reunidos; a esto se lo denomina “pleno”.

faculta para regular no sólo su propio funcionamiento y organización, sino también aspectos de la organización y del funcionamiento de todos los tribunales ordinarios. Este ámbito de competencia recibe la denominación de “superintendencia económica” (Art. 79 inciso primero C.Pol.). Finalmente, la ley ordena que los autos acordados de la Corte Suprema que sean de aplicación general deben ser publicados en el Diario Oficial (Art. 96 inciso final COT).

- 55 La ley orgánica constitucional del Tribunal Constitucional es la LOC 17.997, la cual confiere a este órgano la atribución de reglamentar las materias a que se refiere la ley orgánica mediante autos acordados dictados en sesiones especialmente convocadas al efecto (Art. 90).
- 56 La ley orgánica constitucional del Tribunal Calificador de Elecciones es la LOC 18.460, la cual confiere a este órgano la atribución de regular el procedimiento para la tramitación de las causas y asuntos que se sustancien ante él, mediante autos acordados que deben cumplir los siguientes requisitos: (a) deben asegurar un proceso racional y justo, (b) deben ser adoptados en sesiones extraordinarias, (c) deben ser aprobados con el voto conforme de al menos tres miembros (son cinco en total), y (d) deben ser publicados en el Diario Oficial (Art. 12).
- 57 La relevancia práctica de los autos acordados en el sistema jurídico chileno es enorme. Mediante su dictación la Corte Suprema ha regulado los procedimientos para ejercer acciones constitucionales⁸, recursos en general⁹, y también el modo de redactar las sentencias¹⁰. Pese a su relevancia, no es claro cuál sea el rango jerárquico de los autos acordados ni tampoco si la respectiva potestad normativa de los tribunales superiores de justicia corresponde a una competencia concurrente o exclusiva respecto de las demás potestades normativas del sistema jurídico.
- 58 Al respecto puede decirse, en primer término, que la facultad económica y administrativa de los tribunales superiores de justicia es concurrente con las potestades constituyente y legislativa, encontrándose su ejercicio válido en todo caso jerárquicamente subordinado a lo dispuesto por la Constitución y la ley orgánica constitucional respectiva. Cualquier norma relativa a la organización y funcionamiento de los tribunales, establecida en ejercicio de la potestad constituyente, o, con calidad de ley orgánica constitucional por la potestad legislativa, tiene rango jerárquico superior a cualquier norma establecida mediante un auto acordado.
- 59 Lo mismo cabe afirmar, como criterio general, en lo que respecta a la relación entre los autos acordados y la potestad legislativa en el ámbito de competencia material propio de la ley ordinaria. Este es el caso, de cualquier auto acordado que regule cuestiones relativas al procedimiento al que deben sujetarse las gestiones o juicios, ya que ésta es una materia de ley

⁸ Auto acordado sobre recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad (de 22.03.32); Auto acordado sobre recurso de amparo (de 19.12.1932); Auto acordado sobre acción indemnizatoria por error judicial (D.O. de 11.08.83); Auto acordado sobre tramitación del recurso de protección (D.O. de 27.06.92).

⁹ Auto acordado sobre la vista de la causa (D.O. de 16.09.94).

¹⁰ Auto acordado sobre la forma de las sentencias (de 30.09.20).

ordinaria (Art. 60 N° 3: “codificación procesal”). Siendo éste un caso de regulación concurrente, es aplicable el principio de jerarquía, conforme al cual los autos acordados se subordinan a la ley.

60 Es posible, sin embargo, que se den casos especiales de autos acordados establecidos en ejercicio de atribuciones específicas consagradas o mandatos de regulación complementaria consagrados en preceptos legales orgánico constitucionales¹¹, y que regulen procedimientos especiales, no sometidos tradicionalmente a regulación legal. En estos casos podría pensarse en la existencia de una reserva de competencia en favor de la potestad normativa del tribunal superior de justicia en cuestión, susceptible incluso de ser reconducida al mandato constitucional de determinación de las atribuciones de los órganos en cuestión, en favor. Tratándose de un ámbito de competencia exclusivo del auto acordado, los eventuales conflictos entre éste y la ley (ordinaria) deberían ser resueltos en favor del primero.

Mucho más importante para la práctica es el problema inverso, esto es, la posibilidad de considerar ciertas materias de procedimientos como materias de reserva reforzada de ley. En la disposición respectiva (Art. 19 N° 3 inciso quinto)¹², la Constitución pareciera establecer una exigencia en sentido estricto de regulación legal de los procedimientos jurisdiccionales, con efecto exclusivo respecto de cualquier otra potestad normativa. De sostenerse esta interpretación, habría que considerar invalidables por inconstitucionalidad todos los autos acordados que pretendan regular cuestiones de procedimiento, al menos en lo que respecta a las actuaciones de las partes en la gestión o juicio.

¹¹ Actualmente no existen remisiones constitucionales directas a esta forma de regulación complementaria que impliquen una reserva exclusiva frente a las demás potestades normativas del sistema jurídico. Sí la hubo antes de la Constitución de 1980, en relación con la regulación de la tramitación del recurso de protección, (Art. 2° inciso final del Acta Constitucional N° 3, DL 1.552).

¹² “Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo *legalmente* tramitado. Corresponderá al *legislador* establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos” (las cursivas son nuestras).